

confesion: que las varias confesiones de Limon en virtud de las cuales se declaró vecino de Jalacingo, por serlo de San Antonio, están confirmadas por otras pruebas que demuestran que San Antonio pertenece á Jalacingo, como son, entre otras, el pago de contribuciones hecho á la Administracion de Perote, los cargos públicos que desempeñó el Sr. Limon, como vecino del Distrito de Jalacingo, por serlo de San Antonio, y por último, la confesion del Albacea del mismo Limon: que la circunstancia de haber fallecido Limon y estar radiada su testamentaria en el Tribunal Colegiado de 1ª instancia de Puebla, no puede servir de motivo para que Villegas tenga que demandar á la testamentaria ante el juez de ella; porque la calidad de las testamentarias de ser juicio universal y atractivo se refiere á los herederos y á los legatarios y no á los acreedores de la testamentaria; que con arreglo á la ley 45 tit. 2ª partida 3ª, la demanda debe entablarse en el lugar en que se prometió pagar ó hacer alguna cosa; y con arreglo á la ley 32 del mismo título y partida, versículo la sexta "el fuero se surte con exclusion de otro cualquiera lugar, en el que el demandado ú otro cuyo heredero él fuese, pactó de hacer alguna cosa ea magüer non fuese morador de aquel logar, tenudo sería de responder ante el judgador;" por lo expuesto y de conformidad en lo principal con lo pedido por el Sr. fiscal, se declara:

Primero: que el Juzgado de Letras de Jalacingo perteneciente al Estado de Veracruz es competente para conocer de la demanda de D. José Antonio Villegas contra la testamentaria de D. Claudio A. Limon..

Segundo: se condena á la testamentaria de D. Claudio A. Limon al pago de todas las costas legales causadas en esta competencia.

Tercero: Remítanse las actuaciones al juez de 1ª instancia de Jalacingo con copia certificada de esta sentencia y copia igual al Tribunal Colegiado de 1ª instancia de

Puebla, para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto de lo principal y por mayoría en cuanto al punto de costas, los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*M. Zavala.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Luis Mª Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 8 de 1873.—*Alfo Gomez Eguarte.*

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Escribano Mariano Llanas Puente, contra el Tribunal Superior de ese Estado que lo suspendió por tres meses del ejercicio de su profesión.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal sustituto dice:—Que estrechado por la ley á desempeñar un ministerio tan delicado cuando no es un profesor de derecho, se ha visto con relacion á la presente controversia en el preciso caso de formar un rápido y superficial estudio de la ley sobre amparos y artículos de la Constitucion invocados. Estudio tan ligero y precipitado dará sin duda lugar á incurrir en algunas inesactitudes; pero la buena fé hará quizá producir el acierto en lo sustancial del negocio.—Al examinar esa ley sobre amparos, nota desde luego el que suscribe en la parte segunda de su artículo noveno, que el traslado que manda correr al Promotor, no solo es del informe con justificacion de la autoridad ejecutora del acto reclamado, sino tambien del ocurso del actor. Esto manifiesta claramente que la mi-

sion del fiscal en estos juicios, no es ni la de abogado ni opositor de la autoridad, sino la de defensor de la Constitucion y su justicia, tan expuesta á ser violada por cualquiera persona constituida en autoridad, como en tomarse por medio alusivo de un particular para reclamar agravios ficticios. Bajo mision tan noble se vé examinada la presente controversia.

El Tribunal Superior de Justicia de este Estado, notando no solo negligencia, sino omisiones verdaderamente sospechosas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, contra actos de ese mismo Tribunal, por lo cual le correspondia cumplirla muy directamente; para que tal ejecutoria no fuera burlada ni tampoco traerá un conflicto al Estado, dictó un acuerdo para que aquel actuario en cuyo poder se encontraban las diligencias relativas á la nueva ejecutoria, se las presentase. El actuario niega la obediencia á esa autoridad superior, y por esta falta le impone una suspension de tres meses. Ese actuario no se conforma con la correccion basado en los artículos 195 y 196 de una ley vigente en el Estado, y pide amparo fundándose en que el Tribunal no ejerce autoridad alguna por no proceder de eleccion popular.

La controversia por tanto se reduce á resolver estas cuestiones: 1ª ¿El Tribunal de Justicia en el Estado ha sido ó no electo popularmente? 2ª ¿Siendo electo de esa manera, es autoridad? 3ª ¿Supuesto que lo sea es competente para imponer la pena correccional de que pide amparo el quejoso? La primera es de puro hecho y ha quedado resuelta con las actas orijinales de la eleccion, remitidas por el Tribunal en su segundo informe. Prueba mas plena ni puede exijirse ni puede darse. En este punto la suerte del actor no puede ser mas fatal.

La segunda es de derecho, y se resolverá afirmativamente si la Constitucion del Estado establece ese tribunal; veámosla.

Artículo 22. "El Supremo poder del Es-

tado se divide para su ejercicio en Poder electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial." Artículo 94 al 96.—Que la Justicia se administrará en el Estado por el Superior Tribunal de Justicia, &c.—El Tribunal Superior se dividirá en tres salas. &c.—Los Ministros del Tribunal Superior de Justicia serán postulados por los colegios electorales de Distrito. &c." No cabe duda en que ese Tribunal está establecido por la Constitucion referida, para administrar justicias es por tanto autoridad.

La 3ª tambien de puro derecho, quedará resuelta en el mismo sentido que la anterior, si fuera cierto que los artículos citados por el Tribunal al imponer la correccion de que se queja el actor le conceden esa facultad; he aquí esos artículos: 195:—Los Tribunales y cada Sala en su caso, así como los demas Jueces podrán y deberán corregir de plano con reprension, apercibimiento ó multa hasta de veinticinco pesos y suspension temporal hasta por tres meses del oficio y sueldos, á cualquiera de sus subalternos que actuó ante ellos, siempre que voluntariamente falte alguno á sus respectivos deberes, sin perjuicio de oírlos despues en justicia &c. 196:—Los Jueces y Tribunales castigarán con multas, hasta por tres meses sin disimulo, á los Escribanos que en el desempeño de su oficio, á la hora del despacho no los guarden todo el respeto y subordinacion que es debido. Es cierto que sin género de duda esos artículos conceden al Tribunal la facultad de que usó. Tiene competencia. Se califica si ese Tribunal abusó ó no de esa competencia y hasta que grado haya faltado ó no el quejoso, ni corresponde al fiscal dilucidarlo ni al Juzgado de Distrito calificarlo. En consecuencia, se abstiene el Promotor de entrar en esa cuestion enteramente inútil.

Puesta la presente controversia en su verdadero punto, se cree que los artículos 14 y 16 que se citan por el actor en su escrito de queja, no han sido violados en modo alguno. No el primero, porque el tri-

bunal y ley que aplicó, son anteriores al hecho que ha dado origen á este juicio. No el segundo, porque demostrado está que el tribunal es autoridad, y autoridad competente para imponer la corrección.—Quisiera el promotor haber encontrado la justicia y la verdad al lado del quejoso, que ciertamente le merece toda su simpatía; pero no pudiendo traicionar á su deber y conciencia, preciso es tributar á la justicia y verdad el homenaje que le corresponde, y pedir al Juzgado se digno fallar: que la Justicia Federal no ampara ni protege al actor contra el acto del Tribunal Superior de Justicia que le impuso tres meses de suspension.

Querétaro, Enero 17 de 1873.—*Juan Urbina.*

Alegato de buena prueba en el mismo juicio.

El promotor dice: que podría omitirse este alegato porque la futilidad de las pruebas rendidas por el actor, es patente; estando prevenido por la Suprema Corte que en ningún caso los promotores dejen de alegar, obedeciendo á la superioridad, pasa á formularlo.

Toda prueba recae sobre puntos alegados; los extraños son inútiles. En nuestro caso, el actor lo redujo á dos: primero, falta de autoridad en el tribunal del Estado por no ser de elección popular; segundo, falta de ley anterior al hecho y exactamente aplicada á él. El tribunal en oposición presentó las actas originales de su elección y señaló ley anterior al hecho, y la exactitud con que la aplicó. Están probados estos asertos por el tribunal, y así lo decretó el fiscal en 17 de Enero último desde la foja 32 á la 34; en consecuencia, hoy se limitará á poner en claro que las pruebas del quejoso han venido á poner mas en claro los intentos de dicho tribunal.

Dos escribanos certifican, que las leyes de 12 de Enero de 1870, de 9 de Febrero

de 1871 y de 30 de Noviembre del mismo año sobre elecciones, están vigentes en el Estado.

La primera de esas leyes norma las elecciones; la segunda, ordena que no habiéndolas verificado los Distritos de San Juan, Toluca y Jalpan, las verifiquen conforme á esa primera ley; y la tercera declara quienes son magistrados del tribunal, en virtud de esas elecciones. Si pues esas son las leyes vigentes sobre elecciones en el Estado, y conforme á ellas se verificaron las de magistrados del tribunal, la misma parte actora ha venido á probar los intentos del tribunal, bastante probados ya con las actas originales de su elección. Pero se ha dicho por alguno y tal vez por el actor en su alegato, que no omitiré: que no se repitieron las elecciones en todos los Distritos del Estado, interpretación que capciosamente se ha querido dar á la fracción 5ª del artículo 71 de esa ley de 12 de Noviembre. El fiscal sostiene, que esa interpretación es en efecto capciosa, porque al decir la fracción citada, refiriéndose á la nulidad de elecciones de tres ó mas Distritos, que todos ellos la repitan, no pudo comprender mas que á todos aquellos cuya elección fué nula. La razón de esta inteligencia es resaltante. Primero: porque las elecciones no son un juego de contentillo que han de repetirse siendo buenas cuando no hay necesidad para ello. Segundo: porque el resultado de una segunda elección no podría contrariar al de la primera legalmente hecho. Y tercera: porque esa segunda elección está prohibida en la propia ley citada de 12 de Noviembre que se quiere convertir en un juego de niños. Dice así en su artículo 45:

“Los colegios electorales ni por vía de rectificación pueden volver á conocer de la elección una vez hecha y declarada por el Presidente, siendo nulo cualquiera otro acto en contrario.” Y si la elección solamente declarada hecha por el presidente de un colegio, no puede repetirse sin nulidad.

¿Cómo podría tener lugar esa repetición con las que no solamente declaró hechas un presidente, sino también buenas, subsistentes y válidas por el Congreso del Estado en uso de facultades indisputables? Es, no hay duda, desatinada contra ley, y contra razón, la falsa interpretación de que todos los colegios electorales del Estado que eligieron bien, y no todos cuyas elecciones se nulificaron, sean los que repitan la elección. Esto sería igual á sostener que las elecciones legales y bien hechas de un colegio electoral, quedan malhechas porque otro eligió con nulidad; esto es un disparate. Pero ni aun así vendría al caso aquella mala interpretación, porque las elecciones no se mandaron repetir porque resultaran nulas, sino por no haberse verificado antes.

También se ha hecho mérito de que el Ejecutivo no expidió un segundo decreto señalando día para las elecciones de los Distritos referidos; pero esto nada importa para la validez de las que en ellos se verificaron. Ese decreto de 9 de Octubre fué sancionado en forma, y esto y nada más era lo esencial. Señalarse día por nueva ley ó por una circular á quien correspondiera, es indiferente, puesto que ni en uno ni en otro caso se faltaba á ninguna prevención que existiera en contrario. Se eligió el segundo medio y surtió los efectos que determinó ese decreto de 9 de Octubre.

El resto de tanto material de pruebas con cuyo volumen parece se ha intentado ocultar los expedientes de elecciones, solo demuestra que las pasiones políticas preocupan y ciegan. Solo así puede explicarse, que hombres verdaderamente honrados y dignos de la estimación pública, pueden haber dicho con aplomo que admira, que no hubo elecciones; que al presentarse como testigos, afirmaron no tocarles las generales cuando todos tienen pendientes otros recursos de amparo en que directamente se ven interesados en sostener como partes, lo que en este juicio han venido á sostener como testigos; que otros respondan sobre el nú-

mero de electores de que se componen los colegios electorales sin saberlo, lo que se manifiesta con no haber respondido á la pregunta con la precisión que se les hizo, y por cuya causa no pudieron señalar número fijo ni resultar conformes en sus dichos sino todos singulares; que asientan varios como cierto el imposible, por no decir el disparate, de que la legislatura se reuniera públicamente para falsificar también de una manera pública en un par de horas, los expedientes enteros de elecciones, cuya operación habría necesitado días enteros y cuya falsificación habría sido reclamada por pueblos enteros y centenares de electores: finalmente, que la letra de las firmas de un elector es diversa en las diversas piezas en que aparece, omitiendo expresar que la rúbrica de esas firmas es una misma en todas, lo cual lejos de probar falsificación prueba lo contrario, pues que si sé hubiera querido falsear, buen cuidado se hubiera tenido de usar de una misma letra escrita por una misma mano. Cada una de las reflexiones que envuelvan el anterior párrafo es una objeción que el fiscal opone á esas pruebas testimoniales, y que recomienda á la justificación del juzgado. Por todo lo expuesto el fiscal concluye con pedir, que la Justicia Federal no ampare ni proteja al quejoso contra el acto del Tribunal de Justicia del Estado que ha reclamado.

Querétaro, Febrero 3 de 1873.—*Juan Urbina.*

Es copia de su original. Lo certifico. Querétaro, Febrero 15 de 1873.—*Francisco Ruiz.*

Sentencia del C. juez de Distrito.

Querétaro, Febrero 12 de 1873.—Visto este recurso de amparo promovido por el C. Escribano Mariano Llanas Puente, á virtud de reputar violadas en su persona, las garantías que otorga la Constitución federal en sus artículos 14 y 16, con el acto

del Tribunal Superior del Estado que lo suspendió por tres meses en el ejercicio de su profesion. Visto el escrito de queja en el que el C. Llanas Puente juzga violadas las garantías antes expresadas, careciendo el Tribunal superior de la facultad de ejercer actos que envuelvan el ejercicio de la autoridad, por no haberselos conferido el pueblo al no proceder de eleccion popular el nombramiento de dichos Magistrados; y así mismo, no aplicarse exactamente en el presente caso la ley dada con anterioridad, ni por el Tribunal establecido previamente por ella, no siendo legalmente constituido el que así se titula en el Estado. Visto el auto suspensivo pronunciado por el Juzgado; el informe rendido con arreglo al art. 99 de la ley de la materia por el Tribunal Superior como autoridad ejecutora del acto reclamado, en el que por las razones que manifiesta juzga justificado su procedimiento al imponer la suspension de tres meses al quejoso, por tratarse de ejecutar la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en el recurso de amparo inténtado por el C. Ramon O. Feliú, en cuyo caso el Tribunal y Juzgado de 1ª instancia que era la autoridad ejecutora en el juicio de amparo referido, forman (segun el mismo Tribunal) una sola entidad moral para el efecto de la ejecucion del fallo referido, y siendo esto así, el Escribano que lo era del Juzgado de 1ª instancia estaba igualmente bajo la jurisdiccion del Tribunal, razon por la que al resistirse el C. Mariano Llanas Puente á darle cuenta, esto le impuso la suspension considerándolo como desobediente. Vistas las actas de elecciones para Magistrados del Tribunal, que como justificacion adjunta á su informe; las pruebas rendidas por las partes; y por último, lo alegado por ellas. Considerando: que la parte del quejoso al solicitarse ampliase el termino probatorio, por mayor tiempo que el que previene el art. 10 de la ley respectiva, no marcó la clase de prueba que descaba rendir; y que pudiendo usar del de-

recho que la ley le concede en su art. 11, no lo hizo, motivo por el que este Juzgado no prorogó dicho término, no juzgándose con facultad para ello sino en el caso del referido artículo 11. Considerando: que respecto á examinar la cuestion de si el Tribunal Superior debe tenerse como una sola entidad moral con el Juzgado de 1ª instancia tratándose de la ejecucion de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en un juicio de amparo, y por lo mismo si debe tenerse al Escribano del Juzgado de 1ª instancia como sugeto á la jurisdiccion del Tribunal, con obligacion de darle cuenta en el referido negocio, acatar las providencias de este &c. &c.. cuestiones todas pertenecientes á la parte económica del Tribunal y ajenas por lo mismo á este Juzgado, que tiene que limitarse tan solamente á examinar, si con el acto reclamado se ha violado alguna garantía individual. Considerando: que respecto á la incompetencia alegada al Tribunal, á pesar de ser absoluta por no considerarlo legal, si reconoce el quejoso su existencia de hecho, y los medios de imponerle una pena, como lo manifiesta en su escrito de queja y en el alegato respectivo, razon en virtud de la cual este Juzgado dió entrada y sustanció el presente recurso. Considerando: que al prevenir el artículo 16 de la Constitucion general, que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio &c., si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento, no distingue que clase de competencia sea á la que él se refiere, sino que habla de una manera general y absoluta, por lo que el presente caso, al negarse la competencia al Tribunal Superior por no ser efecto constitucionalmente debe necesariamente tenerse como comprendido en dicho artículo constitucional. Que para averiguar si el Tribunal es autoridad competente, se hace indispensable examinar si su eleccion fué hecha con arreglo á las prescripciones constitucionales, deduciendo de allí la legalidad de su exis-

tencia. Considerando: 1º que la Constitución local previene en el artículo 96 y la ley electoral en el 61, que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean postulados por los Colegios electorales de Distrito, al siguiente día de elecciones de diputados y Gobernador, fojas 37 y 92. 2º Que la fracción 5ª del artículo 71 de la ley electoral, que es la reglamentaria del título 5º de la Constitución local establece, que siempre que por algun motivo se declare nulo el voto de la mitad ó mas de los Distritos, se refuta la postulación *en todos ellos*, y 3º, que la misma ley electoral en su artículo 59 dice: que en los casos de reunion extraordinaria de los Colegios electorales de Distrito, que son los que eligen los poderes del Estado (art. 60 de la referida ley) el Gobierno *convocará* y los Prefectos citarán oportunamente á los electores. Considerando: que componiendose el territorio del Estado de seis distritos que lo son, Amecameco, Cadereyta, Jalpan, S. Juan del Rio, S. Pedro Toliman y Querétaro (art. 70 de la Constitución del Estado) solo hicieron la postulación para Magistrados, tres de ellos que lo fueron, Amecameco, Cadereyta y Querétaro, (fojas 40) en vista de lo cual la legislatura del Estado mandó suspender la computacion de votos hasta tanto los demas Distritos hiciesen su postulación (fojas 40). Que por el decreto núm. 12 de 9 de Octubre de 1871, el congreso del Estado mandó hacer elecciones primarias y secundarias, facultando al Ejecutivo á fin de que este *señalase día* en que debieran verificarse aquellas (fojas 49). Que segun consta á fojas 11 y 12 del expediente electoral del Distrito de Toliman, las elecciones tuvieron lugar en los dias 12 y 13 de Noviembre de 1871; las del Distrito de Jalpan en 12 y 13 de Noviembre del mismo año, fojas 12 y 13 del expediente respectivo y las del Distrito de S. Juan del Rio en los dias 29 y 30 de Octubre del propio año, fojas 2, 3 y 4 del expediente relativo. Que por último, el decreto núm. 35 de 30

de Noviembre de 1871, declaró Ministros del Tribunal á los actuales (fojas 77). Considerando 1º: que la Legislatura del Estado al expedir el decreto núm. 3 de 22 de Diciembre de 1871 (fojas 40) lo hizo sin facultad alguna, pues la Constitución no se lo permite, ni puede tenerse como constitucional el suspender la computacion de votos tratandose de postulaciones; quedó infringido así el artículo 96 de la Constitución local, el 61, la fracción 5ª del 71 y el 72 de la ley electoral. 2º Que al no expedir el Gobierno del Estado la convocatoria para las elecciones de Magistrados del Tribunal, lo que consta por la serie de decretos que por órden progresiva existen en autos de fojas 38 á 88, aún suponiendo que existiese razon legal para mandar verificarlas, se infringió el artículo 59 de la ley electoral (fojas 37) 3º Que el no aparecer en los expedientes de Jalpan y S. Juan del Rio la lista de escrutinio, manifiesta no se cumplió con el precepto legal del artículo 65 de la misma ley (fojas 31) y que por último, al verificarse las elecciones, suponiendo que fuesen convocadas con arreglo á las prescripciones constitucionales, el verificarse aquellas en el Distrito de S. Juan del Rio, en distinto día del en que tuvieron lugar en Jalpan y Toliman, constituye otra infraccion. Considerando: que habiendose violado tan claramente preceptos constitucionales, no puede tenerse como legal la existencia del Tribunal Superior del Estado y consecuentemente no poderse reputar como autoridad competente al garantizarse á los Estados por el pacto federativo (art. 41) la forma de Gobierno representativo popular, y consistir este en que las autoridades de cada Estado sean nombradas con total arreglo á las prescripciones de su Constitución respectiva, la que en ningun caso podrá contravenir al pacto federal. Considerando por último: que no puede reputarse violada la soberanía del Estado por tener esta su justa limitacion en el artículo 109 de la Constitución, y reconocerse como base y objeto

de las instituciones sociales, los derechos del hombre (art. 1º de la Constitución). Por las razones expuestas y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución general y de la ley de 20 de Enero de 1869, definitivamente fallando se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al Escribano C. Mariano Llanas Puente contra el acto del Tribunal Superior del Estado que lo suspendió por tres meses del ejercicio de su profesión. Prevengase á la parte de Llanas Puente reponga el papel comun por el del sello respectivo. Notifíquese; sáquense las copias respectivas y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El C. Lic. Victor de la Peña, Juez de Distrito en el Estado así en definitiva juzgando, lo decretó mandó y firmó. Doy fé.—*V. de la Peña.*—*Francisco Ruiz*, secretario.

Es copia. Querétaro, Febrero 15 de 1873.
—*Francisco Ruiz.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 18 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Escribano Mariano Llanas Puente, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías que otorga la Constitución federal en sus artículos 14 y 16 con el acto del Tribunal Superior del Estado de Querétaro que lo suspendió por tres meses en el ejercicio de su profesión. Vistas las constancias de los autos en que aparece que el quejoso juzga violadas las garantías antes mencionadas por carecer los Magistrados del Tribunal Superior de Querétaro, de la facultad de ejercer actos que envuelvan el ejercicio de la autoridad, por no habérsela concedido el pueblo. Vista la sentencia del Juez de Distrito del mismo Estado que amparó al quejoso; y considerando en cuanto á la incompetencia objetada por Llanas Puente á di-

chos Magistrados: que tal incompetencia llamada de origen por el vicio que se atribuye al nombramiento de Magistrados, debe considerarse comprendida como cualquiera en el artículo 16 de la Constitución federal, puesto que ella no hace distinción ni escepcion alguna. Que admitir una distinción y escepcion por salvar la independencia y soberanía de los Estados en su régimen interior, menospreciando al individuo quejoso, sería sacrificar los derechos del hombre que son el fin á la institución que es el medio, (artículo 1º de la Constitución); que para mejor garantía de los derechos del hombre, la independencia misma y la soberanía de los Estados se encuentra restringida por el artículo 109 de la Constitución federal, que les impone el deber de adoptar la forma de gobierno representativo popular, de manera que se vería infringido además este precepto constitucional, si la incompetencia que se objeta á la autoridad fuera por su origen contraria á esa forma de gobierno.—Que por tales razones y para no dejar violada una garantía individual ni quebrantar un precepto constitucional, se hace indispensable entrar en el examen de si los Magistrados han sido bien nombrados bajo el punto de vista de la Constitución federal.—Que una vez impuesta á los Estados la forma de Gobierno representativo popular, y consistiendo esta forma esencialmente en que por lo menos, los Poderes Supremos sean electos como se consigna por la misma Constitución del Estado, es consecuente que los Magistrados que forman el Tribunal Superior de Querétaro, no pueden ser nombrados sino por elección popular ó de lo contrario serán incompetentes.—Considerando en cuanto si hubo ó no elecciones en Querétaro, para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior: que no ha habido en Querétaro tales elecciones populares; 1º, por la declaración de testigos; y 2º, por la presentación de toda la serie de decretos expedidos por la Legislatura hasta la declaración de Magistrados,

entre los que no se encuentra el decreto de convocatoria y que fíjara los días en que debieran hacerse las elecciones populares en los seis Distritos del Estado.—Por las razones y fundamentos expuestos se declaró: 1º. Que se confirma la sentencia del Juzgado de Distrito de Querétaro de 12 de Febrero de 1873, que dice: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Escribano Mariano Llanas Puente, contra el acto del Tribunal Superior del Estado que lo suspendió por tres meses en el ejercicio de su profesion.—Devuélvase sus actuaciones al juzgado de Distrito de donde proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. *Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—P. Ordoz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D. Francisco Ortoll, contra una providencia de la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que mandó cesar los procedimientos ejecutivos que se seguían contra los antiguos acreedores del mismo Ortoll, sobre devolucion de una casa y sus rendimientos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal ha examinado detenidamente las constancias que acompaña á su informe la primera Sala del Tribunal Superior del Estado, que conoce del asunto á que se contraen estos autos, y de ellas resulta justificado, que habiendo sentenciado el inferior un juicio de cuentas, sobre la administracion de una casa mandada entregar al C. Francisco Ortoll, el apoderado de los acreedores apeló del fallo, y admitido el recurso en el efecto devolutivo, entabló el de denegada apelacion, presentándose á la superioridad con el certificado que las leyes ordenan en tales casos; pero dicho apoderado suplicó á la Sala pidiese los autos originales, alegando que el certificado no estaba exacto porque adolecia de omisiones de hechos importantes de que hizo mencion, que debían tenerse presentes para la calificacion del grado; y que ademas, todo juicio de cuentas es por su naturaleza ordinario, conforme á las leyes y á las doctrinas de los prácticos. El Magistrado accedió á esta solicitud, librándose un despacho ó compulsorio al inferior para que los remitiése, como en efecto los remitió despues de haber opuesto alguna resistencia.

Radicados en la Sala dichos autos, quedó paralizado el negocio, hasta que entró á desempeñarla el Magistrado supernumerario D. Gerardo Campos, en sustitucion